

REFLEXIONES ANTE LA CRISIS ECONOMICA

No sólo los economistas están legitimados para opinar sobre la crisis económica. También los sociólogos debemos intervenir en el debate, ya que tenemos cosas importantes que decir. La economía, como nos enseñó Karl Polanyi en su magistral obra *The Great Transformation*, tiene una base social, está inserta en relaciones sociales, que son las que explican en última instancia los acontecimientos económicos.

Además, la crisis de hoy no sólo tiene una dimensión económica, sino que es el iceberg de una crisis de valores en el seno del capitalismo. Los grandes principios morales que servían para legitimar un sistema económico basado en el beneficio individual —en la medida en que daba como resultado el bienestar general de la sociedad (recordemos el Adam Smith de *La Teoría de los Sentimientos Morales*)— se han desmoronado como consecuencia de la hegemonía neoliberal y su discurso del retorno de la sociedad civil. La exaltación de los intereses individuales por encima de los intereses generales impregnó la opinión pública y la agenda política, provocando la retirada del Estado de muchas áreas y haciendo dejación de sus funciones de equilibrio y regulación del sistema económico.

Del *reaganismo* y *thatcherismo*, pasando por el periodo de hegemonía de los *neoon*, se heredó un capitalismo salvaje (bautizado con el eufemismo de “capitalismo popular”) en el que nos hicimos la ilusión de que todos podíamos lograr los beneficios de un sistema económico con una capacidad ilimitada para hacer negocio. La codicia se implantó como principio rector de nuestro comportamiento cotidiano, incluso entre los que jamás se habían ocupado de entrar en la dinámica del negocio especulativo.

En España, ha habido dos ejemplos paradigmáticos a los que todos nos apuntamos en un frenesí patológico: el *boom* inmobiliario y la inversión especulativa en activos financieros. En esos dos ámbitos, la codicia guió nuestros actos, a lo que contribuyó, sin duda, la frivolidad de una clase política que alentó nuestros peores sentimientos difundiendo la idea de que España era un país rico y que los españoles nos podíamos permitir el lujo de vivir al nivel de los países más desarrollados del mundo. No se nos recordó que eso no es verdad, sino que España es un país pobre en recursos, y que todo lo que ha conseguido ha sido a base de mucho esfuerzo y trabajo.

Pero he aquí que llega el hundimiento del Titánic, y todos andamos buscando el bote salvavidas que nos salve del naufragio, recurriendo de nuevo al Estado como ente protector. Es cierto que ha habido otras crisis de las que España ha salido con mayor empuje si cabe para emprender nuevos retos. La novedad, y la gravedad, de esta crisis es que, por primera vez, nos coge con el nivel más alto de endeudamiento de la historia (de familias, de empresas y de entidades financieras), sin el soporte de las ayudas europeas (cada vez más reducidas) y sin posibilidad de refinanciarlo en un mercado internacional paralizado. Ello genera en la población una situación de miedo e incertidumbre, cuando no de pánico, ante la posibilidad (cada vez más real) de perder el empleo.

Ante la crisis, se escuchan voces sobre la necesidad de cambiar de modelo de crecimiento económico y de recuperar el papel del Estado como regulador de la economía. Pero eso qué es. Se habla de abandonar el sector del “ladrillo” y potenciar el sector de las energías renovables, de la industria aeroespacial, de las nuevas tecnologías,... Pero en realidad no se ha abierto un debate serio sobre lo que eso significa y sobre el papel que le correspondería en ello a los poderes públicos. Es necesario pensar sobre ello con valentía y rigor, y valorar qué supone realmente el cambio de modelo de crecimiento, cuales serían sus efectos a corto y medio plazo y si la economía española está preparada para abordar ese cambio. Si no lo hacemos así, corremos el riesgo de abandonar, por perverso, el modelo económico actual cuando todavía no estamos preparados para implantar otro diferente. En ese contexto, el debate no debiera limitarse sólo a dar respuesta al tema de la crisis económica, sino a pensar sobre el papel del Estado, sobre la calidad de los servicios públicos, sobre la salud de nuestra democracia, sobre el dinamismo de

nuestra sociedad civil. En definitiva, llenar la agenda política y ciudadana con preguntas y reflexiones que orienten el debate sobre el papel de España en un mundo complejo y global. En este artículo plantearé algunas de las que creo más relevantes, seguro de que haremos desde el IESA aportaciones válidas en el momento de las respuestas.

La primera tiene que ver con la salud de nuestro sistema educativo y de formación profesional. Es indudable la inestabilidad que ha experimentado este sistema en las dos últimas décadas, con reformas sucesivas y con una legislación sometida al vaivén de los cambios de gobierno experimentados en ese periodo (más de seis leyes en treinta años). Ha sido lamentable el tiempo perdido en unos años donde se hacía perentorio adaptar el sistema educativo a los cambios del mercado laboral y a la rápida introducción de las nuevas tecnologías, además de al reto de la competencia en un mundo cada vez más abierto y globalizado. Nos encontramos ahora con un sistema educativo y de formación profesional que no está preparado para responder a los actuales desafíos, y lo que es más grave, sin voluntad política de los dos grandes partidos para alcanzar un pacto en materia de educación que le dé estabilidad a las reformas que son necesarias para que el sistema responda a las exigencias del nuevo patrón de crecimiento. Los datos de la OCDE y los informes PISA han puesto el dedo en la llaga, mostrando algunas de las más importantes deficiencias de nuestra enseñanza secundaria: más del 30% de los alumnos no finaliza sus estudios de bachillerato (frente al 15% en la UE), muchos de nuestros estudiantes no alcanzan un empleo vinculado a su formación, nuestro gasto en educación está por debajo del de los países de nuestro entorno,.... Si nos centramos en la enseñanza universitaria, nos encontramos con un sistema muy encerrado en sí mismo, con apenas conexión con el mundo empresarial, lo que le incapacita para ser el soporte científico del cambio de modelo de crecimiento que se propone. La trifulca en torno a Bolonia es paradigmática de la falta de horizonte de nuestro sistema universitario, donde se está perdiendo la oportunidad de reformar los planes de estudios con una visión de futuro y no con una estrategia defensiva para mantener las situaciones de poder en los departamentos.

Y qué decir de la salud de nuestro tejido productivo y de nuestro sistema empresarial. Salvo contadas excepciones, nuestro empresariado no está preparado para incorporarse al cambio de modelo de crecimiento, dado su bajo nivel de cualificación y su incapacidad para aprovechar el gran potencial que representa disponer de una generación de jóvenes extraordinariamente preparados. Tampoco está nuestro sistema laboral en condiciones de afrontar el reto de la competitividad, ya que mantiene unas prácticas que le hacen poco productivo (elevado nivel de absentismo laboral, excesivo grado de precariedad y temporalidad, altos costes sociales,...). A cambio, sólo se les ocurre a nuestros empresarios como solución lanzar el mensaje de abaratar el despido (con el consiguiente rechazo y enfado de los sindicatos), cuando lo que deberían de pedir es abaratar el empleo (reivindicando una reducción de los costes sociales en la contratación laboral). Tal vez sería el momento de discutir las bases de financiación de nuestro sistema de protección social (bastante saneado, por cierto, y sustentado, sobre todo, en las aportaciones empresariales a la seguridad social) y pensar en otras vías complementarias, como los impuestos indirectos tipo IVA tal como ya se hace en otros países europeos (y donde España está aún en los últimos lugares de la presión fiscal sobre el consumo).

Un tema controvertido, sin duda, es el de la dependencia energética de nuestro país respecto de las energías fósiles. Más allá de los posicionamientos ideológicos (tan legítimos por otro lado), debemos comenzar por hablar de los costes económicos que supone esa dependencia, así como del coste (no sólo económico, sino ambiental) que significa recurrir a las energías renovables (solar, eólica, hidráulica,...). Creo que sería conveniente abrir el debate sobre el modelo energético, incluyendo el tema de la energía nuclear como parte de la llamada “cesta energética” de la que tendríamos que abastecernos como país sin recursos petrolíferos. Es una incongruencia manifestarnos en contra de instalar centrales nucleares en España, y aceptar que se le compre la energía a Francia, país donde existe un buen número de esas centrales (en caso de alguna fuga radioactiva, seríamos los primeros en vernos afectados). La decisión sobre el cierre de la central de Garoña podría ser una buena oportunidad para ese debate. Vinculado a

este tema del debate energético se encuentra el no menos importante asunto de los acuerdos de Kyoto, haciendo factible la recuperación económica con el cumplimiento de lo acordado en materia de emisiones de CO2.

Se nos dice que la recuperación de nuestra economía tiene que basarse en sectores distintos de los que han sido tradicionalmente su base de apoyo (turismo, construcción, agricultura y alimentación), en sectores innovadores y con mayor capacidad para generar empleo estable y valor añadido. Pero lo cierto es que esa apuesta (interesante y necesaria sin duda) puede que lleve su tiempo y que sus efectos se verán a medio y largo plazo. Mientras tanto, lo más probable es que tengamos que basar una vez más la recuperación económica en los sectores tradicionales, aunque esta vez adecuadamente redimensionados y adaptados a las exigencias de las nuevas pautas del desarrollo sostenible. ¿Acaso no puede un sector de la construcción bien dimensionado contribuir a la renovación de nuestro parque de vivienda con criterios de sostenibilidad y apostando por nuevas formas de habitabilidad y de consumo energético? Respecto al turismo, seguirá siendo, sin duda, una fuente importante de empleo y renta, pero deberíamos aprovechar los efectos negativos de la crisis (en lo que se refiere a la disminución de turistas extranjeros, que ya se está notando) para redimensionar el sector, renovar la infraestructura hotelera, modernizar los sistemas de gestión y equilibrar la oferta turística (demasiado volcada al turismo de sol y playa). Si hablamos del sector agroalimentario, quizá sea el que mejor está resistiendo los efectos de la crisis económica, tal vez porque ha experimentado desde la entrada de España en la UE una fuerte reconversión y ha sabido adaptarse a las nuevas demandas de los consumidores y de los mercados internacionales (es el único sector que ofrece una balanza comercial positiva).

Pasando al ámbito de las políticas sociales, es indudable que en un escenario restrictivo como el que nos encontramos puede que se vean recortados los recursos disponibles, aunque el gobierno Zapatero ha puesto como prioridad que ese recorte no se producirá. En ese contexto, cabe preguntarse si está garantizada la calidad de los servicios públicos con el actual sistema de gestión, o habría que ir hacia sistemas público/privados para asegurar que el derecho de todos los ciudadanos al servicio público sea efectivo en la práctica. Creo que es hora de que se hable de deslindar qué parte debe asumir el sector público en materia de política social, sin renunciar al deber de asegurar el acceso de todos los ciudadanos a los servicios de bienestar, y que parte debiera ser externalizada al sector privado para garantizar a la población la calidad de dichos servicios.

La presencia de España en el concierto internacional es manifiesta, aunque mejorable. Una vez consolidada nuestra participación como potencia de nivel medio en los foros internacionales, deberíamos definir mejor nuestro papel en determinados ámbitos regionales, aprovechando mejor nuestra posición. El ingente esfuerzo económico que hace España en materia de ayuda al desarrollo no se ve recompensado por un fortalecimiento de nuestra presencia internacional, desaprovechándose el potencial que supone nuestra red de ONGs, circunscrita a veces a proyectos de bajo calado y de escasa integración (aunque loables por el esfuerzo que supone llevarlos a cabo).

Una democracia avanzada como la nuestra, exige mejorar el control de la política por parte de los ciudadanos, impulsando la participación más allá de las vías convencionales (sindicatos, partidos políticos, elecciones,...), y exige además que haya mecanismos rigurosos para medir la calidad del sistema democrático. La descentralización político-administrativa encarnada en el Estado de las Autonomías es una realidad de nuestra estructura constitucional, pero los ciudadanos tenemos el derecho y el deber de exigir eficiencia a los poderes públicos en el ejercicio de sus respectivos ámbitos competenciales, y de exigir cooperación y solidaridad entre las distintas regiones para que se mantenga el modelo de España plural sin renunciar a la existencia de un Estado que garantice el equilibrio territorial y la cohesión social entre los diversos territorios. Ahora tendremos la oportunidad de discutir sobre estos asuntos cuando salgan a la luz las propuestas sobre el modelo de financiación.

Por último, y sin agotar la variedad de cuestiones a debatir, tenemos ante nosotros la asunción por España en el primer semestre de 2010 de la presidencia de turno de la Unión Europea en un momento de crisis del proyecto europeo. Nuestro presidente de gobierno, poco interesado hasta ahora en asumir protagonismo en el escenario de la Unión, no va a tener más remedio que ejercer algún tipo de liderazgo en ese semestre, para sacar adelante el Tratado de Lisboa (hoy parado por el rechazo irlandés), impulsar acuerdos de cooperación económica para afrontar la crisis, iniciar el debate sobre los fondos estructurales para el próximo escenario financiero tras 2013, orientar la discusión sobre la adhesión de Turquía y, en definitiva, contribuir a recuperar el pulso de la construcción europea, hoy bajo mínimos tras la baja participación en las elecciones del 7-J y el avance de los euroescépticos y grupos radicales anti-UE.

Estas son algunas de las cuestiones a plantear en estos momentos y cuyas respuestas exigen un gran debate nacional en el que los sociólogos y un centro público de investigación social como el IESA-CSIC tienen cosas importantes que decir. En realidad son temas que, en sí mismos, constituye una verdadera agenda para la reflexión política desde el ámbito de la sociedad civil.

En tiempos de crisis, como los que asolan las economías de todo el mundo desde hace un año, y muy especialmente la española, un centro como el IESA-CSIC tiene el deber de contribuir a una mejor comprensión de sus causas y efectos. Tenemos claro que nuestra aportación debe orientarse tanto a los espacios científicos como a aquellos otros más accesibles a los ciudadanos, para que el debate no se circunscriba a ser un espacio más de la lucha partidaria o del análisis económico excesivamente reduccionista.

Nuestra experiencia en el área de los estudios de opinión pública sobre áreas temáticas muy variadas (medio ambiente, desarrollo rural, salud, nuevas tecnologías, pobreza y exclusión, juventud, mujer, discapacidad, vivienda, turismo, deporte, consumo, participación ciudadana, política científica, comportamiento electoral, calidad de la democracia, migraciones,...) avalan al IESA-CSIC para ofrecerse como centro de referencia a la hora de desarrollar foros de debate sobre los problemas que afectan a la sociedad española en general y a la andaluza en particular. Nuestro compromiso como centro público es impulsar y participar en esos foros, aportando información rigurosa que permita basar los debates en el intercambio de ideas y en una clara vocación de racionalidad.

Ese es nuestro reto y nuestra responsabilidad.

Eduardo Moyano Estrada